

de la Cruz, si consideramos que aparecía como «general allendista», amigo personal» del Presidente de la República. y al mismo tiempo era el que más opinión formaba entre sus mandos para derrocar a Allende.)

Los «duros» decían que debía montarse un «esquema de acción» parecido al de septiembre-octubre de 1970, ya abortado por las razones que vimos en este mismo capítulo. El esquema era el de nombrar una Junta Militar transitoria, presidida por Torres de la Cruz, para que «en un plazo de seis meses» llamase a nuevas elecciones presidenciales, con «Eduardo Frei como candidato».

Durante la segunda mitad de 1971 y los primeros ocho meses de 1972, la influencia de la tesis de los «duros» no tuvo gran peso en el seno del Ejército, aun cuando contaba con las simpatías del entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danyau, y de los generales Gustavo Leigh, César Berdichewsky y Carlos Van Schowen, así como del jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, vicealmirante José Toribio Merino, y sus colegas Pablo Weber y Horacio Justiniano (los tres en estrecho contacto con la US Navy). Justiniano, entretanto, cumplía a cabalidad con su papel de «allendista», apareciendo ante Salvador Allende como «hombre progresista», «admirador de la Unión Soviética» y con una «lealtad a toda prueba».

Este grupo de los generales «duros» contaba con una característica que los generales «reformistas» no tenían: su estrecho contacto con figuras políticas como Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana, y Patricio Phillips, Pedro Ibáñez y Francisco Bunes, del Partido Nacional.

Los constitucionalistas

El equilibrio y la marginación de la lucha política visible de las Fuerzas Armadas lo mantenían un grupo de generales encabezados por el propio comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats González. Sus figuras más conocidas estaban en el jefe de la Primera División, Joaquín Lagos Osorio; el jefe del Estado Mayor, general Augusto Pinochet Ugarte; el general Héctor Bravo Muñoz (que después sería enviado a la División de Caballería en reemplazo de Hernan Hiriart, cuando éste intentó una insurrección militar en marzo de 1972 y fue dado

de baja); y los generales Javier Palacios Ruhman y Carlos Araya.

Carlos Prats era el vocero de los «constitucionalistas», cuya línea general de conducta era «apoyemos a Allende para que él nos apoye a nosotros». «Consigamos con Allende transformar nuestras Fuerzas Armadas en una institución de preparación inmejorable, de una situación económica elevada y de una capacidad efectiva.» Carlos Prats planteaba la tesis de que «debemos trabajar para formar un Gobierno Allende-Fuerzas Armadas» que se base en la división de responsabilidades: Allende maneja a las masas de los trabajadores, y nosotros manejamos el país para que prospere. Tenemos que ayudar a Allende a golpear tanto a «los extremistas de derecha como a los de izquierda».

La tesis de Carlos Prats, hasta octubre de 1972, o más certeramente hasta marzo de 1973, fue la que tuvo mayor aceptación en los mandos altos, medios y bajos del Ejército y en los medios y bajos de la Fuerza Aérea y la Marina. En el cuerpo de Carabineros, el general director José María Sepúlveda Galindo era un adherente entusiasta a este modo de pensar.

Precisamente por su moderación, y porque permitía hacer el juego de «esperar y ver», los generales «reformistas» agrupados en la Academia de Guerra, y en estrecho contacto con el Pentágono, se mantuvieron como apoyo constante a Carlos Prats hasta que la situación de «stampida» de las organizaciones de obreros, campesinos y empleados (en 1973) pusieron en peligro todo el sistema, haciendo surgir la necesidad de no sólo derrocar a Allende, sino de destruir la democracia burguesa para reemplazarla por el fascismo.

En suma, el comandante en jefe del Ejército dirigía a un grupo de altos mandos para llegar a la meta de un Gobierno Allende-FF.AA., con la participación de la Democracia Cristiana y con la exclusión de los sectores «extremistas» de los partidos comunista y socialista. Éste era el grupo de los «constitucionalistas».

Otro grupo de generales, el de los «reformistas», tenía la meta de «prepararse lo suficiente» para estar en condiciones de gobernar al país y formar un Gobierno puramente militar o con Allende solo, sin los partidos de la Unidad Popular. Ambos grupos de generales pensaban que, en todo caso, al llegar al Gobierno, no podían destruir todo lo ya andado en el cambio de estructuras económicas, y se debía seguir con el desarrollo del capitalismo de Estado.

Un tercer grupo, el de los «duros», a quienes se les llamaba también fascistas, propiciaba el derrocamiento inmediato de Allende, la instauración de un Gobierno militar muy breve, de sólo seis meses, y la entrega posterior de la presidencia de la República a un político del estilo de Eduardo Frei.

Todo esto ocurría desde el 4 de septiembre de 1970 hasta noviembre-diciembre de 1972, donde el desarrollo de las ideas en el seno de los altos mandos tomó un camino más definido. Esto refleja cómo, en ningún momento durante su mandato, el presidente Allende contó con la llamada «lealtad» de las Fuerzas Armadas y Carabineros.